

IERAL

**Nombre del proyecto: Análisis comparativo de los efectos económicos de la política de financiamiento propio de los principales municipios y del gobierno provincial de Córdoba**

**Informe Final**

**(Tercera Parte)**

**Provincia de Córdoba  
Consejo Federal de Inversiones**

**Elaborado por: IERAL de Fundación Mediterránea**

**Córdoba, 16 de Agosto de 2006**

## Índice

I. Introducción.....	3
II. Algunos aspectos teóricos.....	5
III. Aspectos legales .....	11
III.1 Impuesto a los Ingresos Brutos .....	11
III.2 El Convenio Multilateral.....	13
III.2.1 Situaciones de aplicación del Convenio .....	14
III.2.2 Régimen General.....	15
III.2.3 Regímenes Especiales .....	16
III.3 El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (1993).....	17
IV. La Carga Fiscal Provincial .....	22
IV.1 La importancia del Impuesto a los Ingresos Brutos en el financiamiento subnacional.....	22
IV.2 La carga fiscal del IIB .....	23
IV.2.1 Montos Mínimos y Montos Fijos .....	23
IV.2.2 Alícuotas legales .....	24
IV.2.3 Análisis según grupos de actividad .....	26
IV.2.3.1 Actividades Primarias.....	27
IV.2.3.2 Industria Manufacturera y Construcción.....	28
IV.2.3.3 Servicios Públicos.....	28
IV.2.3.4 Comercio y restaurantes.....	29
IV.2.3.5 Intermediación financiera .....	30
IV.2.3.6 Inmobiliaria, empresarial y de alquiler .....	31
IV.2.3.7 Enseñanza, salud y otros servicios comunitarios.....	32
V. Conclusión del informe parcial.....	33
Anexo 1: Convenio Multilateral .....	34
Anexo 2: Pacto Federal.....	52

## I. Introducción

El impuesto a los ingresos brutos (en adelante IIB) es un impuesto general a las ventas, plurifásico y acumulativo, sobre el ejercicio habitual y a título oneroso de una amplia gama de actividades. Grava más de una vez la transferencia del bien o de sus insumos a lo largo del proceso productivo, que se aplica sobre el ejercicio de la actividad económica con propósito de lucro. El tributo incide sobre todas las actividades y ventas sin que exista crédito disponible por el impuesto pagado en etapas anteriores<sup>1</sup>. Se determina sobre el monto total de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal de tales actividades.

Los marcos legales que establecen la implementación de dicho impuesto son el Código Tributario de la provincia como así también la Ley Impositiva Anual. En ellos se establecen los regímenes especiales para determinar la materia imponible de ciertos sectores con características particulares<sup>2</sup>, se especifican las deducciones que en general se efectúan sobre la base imponible y se delimitan las exenciones del impuesto que rigen para determinados agentes o actividades.

Además, se encuentran demarcando este impuesto el Convenio Multilateral y el Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento. El primero, conforma el cuerpo de normas que las provincias de Argentina han acordado con el fin de armonizar la implementación del IIB cuando la actividad

---

<sup>1</sup> Desde el punto de vista teórico, potencia las distorsiones sobre la asignación de recursos.

<sup>2</sup> Aquellos en los cuales el desarrollo de sus actividades generan ingresos monetarios que no constituyen retribuciones en sí, como ser agencias de turismo, agencias de publicidad, seguros y financieras.

de un contribuyente se ve extendida a más de una jurisdicción. El Pacto Federal, por su parte, es un compromiso firmado por todas las provincias con el objetivo general de establecer las bases para un crecimiento sostenido de la actividad económica, la productividad y los niveles de ocupación, y con el objetivo particular, entre otros, de eliminar las distorsiones relacionadas a aspectos tributarios.

El presente informe parcial tiene como objetivo analizar el impuesto a los ingresos brutos en la provincia de Córdoba, bajo la óptica de la carga fiscal legal y su incidencia sobre las diversas actividades económicas. Para ello, este informe se estructura de la siguiente manera: primero se da una revisión de los aspectos teóricos más relevantes en cuanto a la esencia misma del impuesto. Luego, se exponen los aspectos legales del impuesto relacionados con el Convenio Multilateral y el Pacto Federal. Las características propias referidas a hecho imponible, materia imponible, contribuyentes, exenciones y deducciones ya fueron analizadas en el primer informe parcial. Finalmente, se incluye un análisis de las diferentes alícuotas teóricas mencionadas por las leyes impositivas para los grupos de actividades ya definidos en el segundo informe parcial.

## **II. Algunos aspectos teóricos**

Dada la naturaleza del impuesto, su aplicación grava más de una vez la transferencia de los bienes y servicios a lo largo de las diferentes fases del proceso productivo y comercial, sin la posibilidad de poder deducir en cada etapa, el impuesto que ha sido pagado en las fases anteriores. En esencia, el no posibilitar la deducción de la carga tributaria en las etapas previas genera efectos no deseables ampliamente conocidos en materia de tributación:

- Incide bajo un efecto plurifásico acumulativo (o conocido también como efecto “cascada”) que implica la acumulación de la carga tributaria, al gravar a todas las etapas del proceso productivo.
- Incentiva la integración vertical de los procesos de producción como forma de minimizar el monto a pagar en concepto del impuesto.
- Carece de neutralidad, ya que altera el sistema de precios relativos al afectar de manera no uniforme el precio de todos los bienes.
- Genera pérdida de competitividad frente a productos importados, desalentando de este modo la exportación y estimulando la importación;
- Discrimina sobre actividades de múltiples etapas;
- Produce una exportación de la carga a otras jurisdicciones, al gravarse la producción de bienes y servicios de una jurisdicción, ya sea que se consuman dentro o fuera de la misma.

Estos efectos perversos, que se desatan por la práctica del IIB, pueden sintetizarse en cuatro grandes categorías conforme impacten sobre:

- a) la **eficiencia asignativa**,
- b) la **eficiencia administrativa**,
- c) los **aspectos distributivos**, y
- d) la **competitividad internacional**<sup>3</sup>.

A continuación se explican de manera más detallada cada una de estas categorías en el orden presentado y referenciadas de acuerdo a su numeración alfabética.

a) Entre los impactos negativos en materia de **eficiencia asignativa** se pueden mencionar la distorsión de precios relativos de la economía, la no neutralidad en las decisiones empresariales, la incidencia sobre las decisiones inter-temporales, el incentivo a la relocalización espacial de las firmas, la tendencia a exportar la carga tributaria y los posibles problemas de ilusión fiscal.

En efecto, el uso del impuesto conlleva a que el sistema tributario implementado en una jurisdicción pierda la característica deseable de ser neutral en la asignación de los recursos. Su carácter plurifásico y acumulativo impide conocer con precisión la incidencia del impuesto en el costo de un determinado bien. La *distorsión en los precios relativos* se refleja por el hecho de que el precio final de los bienes y servicios depende no sólo del costo de producción sino que además del número de veces que estos bienes son gravados hasta llegar a la etapa de consumo final. Por lo general, dependiendo de la estructura de mercado y las elasticidades precio de la demanda y oferta, es probable que el precio de un bien particular que el consumidor final termine pagando, se

---

<sup>3</sup> Los impactos sobre el comercio internacional devienen de los efectos sobre competitividad internacional, por lo que existe relación con la eficiencia asignativa. Sin embargo, dada la relevancia del tema, se los presenta de manera separada.

encarezca en un monto superior a la suma de las alícuotas de la cadena productiva y de comercialización en cuestión.

El efecto acumulación no sólo impacta sobre los precios relativos sino que también restringe las *decisiones de las empresas*. Por un lado, las empresas eligen las etapas que llevarían a cabo en el proceso productivo de un bien. La presencia del IIB favorece la integración vertical con el objetivo de eludir el pago del impuesto que se debería efectuar en los sucesivos pasos del proceso, en caso de no existir tal integración. Por otro lado, el impuesto afecta también las decisiones de las empresas en cuanto a la elección de los insumos a demandar. Debido a que el IIB sólo recae en ciertos factores productivos, las empresas pueden tener el incentivo de sesgar su demanda hacia los insumos que no son alcanzados por este impuesto.

Los efectos sobre la eficiencia asignativa no sólo son estáticos sino que también los impactos recaen sobre las *decisiones intertemporales*. Pese a que los bienes de capital puedan estar exentos al impuesto, el IIB puede gravar de manera indirecta a la inversión a través del encadenamiento de insumos empleados en la producción de la tecnología utilizada en los procesos productivos. Ello afecta a las decisiones de ahorro e inversión y como consecuencia genera una ineficiencia dinámica desde el punto de vista de elección entre el consumo y el ahorro.

La *relocalización espacial de empresas* se produce en parte como consecuencia de que cada jurisdicción decide sobre las actividades a gravar, las alícuotas, exenciones y el marco legal en general del IIB. Al ser éste un impuesto que en parte aplica el principio de origen y en parte el principio de destino (a través del Convenio Multilateral), induce la competencia entre jurisdicciones con el objetivo de atraer la radicación de actividades económicas. Esta conducta competitiva entre las distintas provincias, junto con los incentivos para la

integración vertical, puede generar relocalizaciones “forzadas” de los procesos de producción.

El funcionamiento del impuesto conlleva, a su vez, a que en determinadas transacciones se *exporte la carga del impuesto* hacia contribuyentes de otras jurisdicciones, lo que puede generar conductas ineficientes con relación a las decisiones de gasto público (erogaciones financiadas en parte por no residentes). Este problema de ineficiencia en las decisiones colectivas se intensifica porque además los contribuyentes suelen ser incapaces de vislumbrar con claridad el pago del impuesto. Se produce por lo tanto la falta de *visibilidad de la carga tributaria* que trae aparejado problemas de ilusión fiscal.

b) La aplicabilidad del IIB influye sobre la ***capacidad y efectividad administrativa*** de los fiscos. En términos generales, las unidades encargadas de la recolección de los impuestos persiguen los objetivos de minimizar el costo administrativo y mejorar el cumplimiento tributario con el fin de incrementar el rendimiento del impuesto. La amplia gama de actividades que están afectadas por el IIB, conjuntamente con la posibilidad de que las diferentes jurisdicciones apliquen el impuesto según su conveniencia, conlleva a enfrentar cierto grado de complejidad administrativa a la hora de la recaudación del mismo. Sin embargo, como consecuencia de que los fiscos provinciales han adquirido contundente experiencia durante casi medio siglo de aplicación, los inconvenientes administrativos han sido aminorados. No obstante, el problema central gira en torno al control de la evasión que se genera en parte por el no uso de información cruzada de los contribuyentes como método de fiscalización, por la falta de vinculación existente entre los mismos.

c) En lo que respecta a los ***efectos distributivos*** perversos, éstos dependen en gran medida de la posibilidad de trasladar la carga tributaria. Cuando ello sucede y el peso del impuesto se traslada hacia adelante, la



distorsión que se produce en los precios finales debido al trato dispar entre las actividades, afecta a los diferentes estratos de la sociedad dependiendo de la estructura de gasto que cada grupo tenga. A su vez, los individuos también pueden verse afectados por el impuesto cuando su carga tributaria se traslade hacia atrás. En efecto, dependiendo de la estructura de la propiedad de los factores de producción<sup>4</sup>, la retribución de estos factores puede disminuir como consecuencia del traslado del impuesto.

d) Finalmente, el impacto nocivo que el IIB tiene sobre el comercio internacional se bifurca en dos sentidos. Por un lado, los bienes exportados se ven perjudicados debido a la imposibilidad de estimar la incidencia del impuesto en su costo y la consecuente dificultad de aplicar el reintegro del mismo a los productores locales. Las normas internacionales sólo aprueban la devolución del impuesto incluido en los costos si es factible conocer con exactitud su incidencia. Por otro lado, los bienes importados se ven “artificialmente” favorecidos ya que el impuesto recae sólo sobre la etapa final de comercialización de los mismos, a diferencia de los bienes producidos domésticamente que son alcanzados en todas las etapas. Ello introduce un estímulo a la importación de bienes finales.

Si bien existen todos estos aspectos negativos en la utilización del IIB, la causa primordial de su vigencia debe radicar en su alto **rendimiento tributario**. El IIB tiene la capacidad de generar una importante fuente de recursos aún con alícuotas relativamente bajas para los fiscos provinciales. Esta caudalosa recaudación, influye de manera positiva en la autonomía financiera de las provincias ya que éstas pueden hacer frente a sus erogaciones en buena medida con sus recursos propios. Obviamente, al tratarse de un impuesto que

---

<sup>4</sup> También juega un rol determinante en la factibilidad del traslado de la carga, la estructura de mercado que caracteriza a los factores de producción.

depende del nivel de actividad económica, su recaudación se ve sujeta a las características socioeconómicas que tenga cada jurisdicción.

Además, en términos generales el grado de dificultad en la liquidación del impuesto es baja, dado que sólo requiere especificar el nivel de ventas de la actividad. Tiene una elevada cantidad de contribuyentes, y es posible implementar mecanismos de retención o percepción del impuesto con el objetivo de disminuir el potencial de evasión en la última etapa de la cadena de comercialización. También es factible implementar pagos fijos o mínimos, especialmente en el caso de pequeños comercios minoristas.

Como sucede habitualmente con impuestos permanentes, la estructura productiva y comercial se ha adaptado al impuesto, más allá de sus efectos distorsivos teóricos.

### III. Aspectos legales

La Constitución Nacional, en su artículo 75, determina que los gobiernos provinciales tienen la posibilidad de establecer impuestos directos sin restricciones, e indirectos en concurrencia con la Nación. Las 23 provincias argentinas y la C.A.B.A. tienen un Impuesto sobre los Ingresos Brutos, según lo establecen sus Códigos Tributarios y Leyes Tributarias Especiales. Otras regulaciones de potestad tributaria de los gobiernos provinciales vienen dadas por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (que impide a las provincias aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por dicho régimen) y los convenios o pactos entre jurisdicciones, como es el caso del Convenio Multilateral y el Pacto Federal que a continuación se analizan<sup>5</sup>, luego de un breve resumen de las características legales del Impuesto a los Ingresos Brutos.

#### III.1 Impuesto a los Ingresos Brutos

Si bien este impuesto ya fue analizado en el primer informe parcial, es importante rescatar cuestiones esenciales del mismo. Brevemente, las características de este impuesto, y salvo para los casos especiales, son las que siguen:

- El **hecho imponible** es el ejercicio habitual y a título oneroso, en una jurisdicción determinada, de las actividades económicas.

---

<sup>5</sup> Ambos documentos se adjuntan como Anexo.



- La **base imponible** está constituida por el monto total de los ingresos brutos devengados en el período fiscal de las actividades gravadas.

Se considera ingreso bruto al monto total devengado en concepto de venta de bienes, remuneraciones obtenidas por los servicios, retribución de la actividad ejercida, intereses obtenidos por préstamos de dinero y, en general, al de las operaciones realizadas.

- Existen conceptos que **pueden deducirse** de la materia imponible, tales como los gravámenes de la Ley Nacional de Impuestos Internos, las contribuciones municipales sobre las entradas a espectáculos públicos, los importes destinados al apoyo de actividades educacionales o de beneficencia legalmente reconocidas y lo abonado en concepto de remuneraciones al personal docente y de implementos utilizados al efecto por los contribuyentes que sostienen programas de capacitación.
- Finalmente, la materia imponible se ve reducida por el otorgamiento de **exenciones** a determinados agentes o actividades. Las exenciones correspondientes a este impuesto pueden ser subjetivas u objetivas. Entre las primeras se destacan en primer lugar el Estado, por la razón de que éste no se cobra impuestos a sí mismo, y en segundo lugar la Iglesia, las fundaciones, las asociaciones profesionales y las entidades sin fines de lucro en general, las cuales llevan a cabo actividades socialmente valoradas y sin ánimo de obtener rédito económico por su ejercicio. La concesión de exenciones objetivas responde en la mayoría de los casos a la intención de atenuar los efectos distorsivos que puede generar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, eliminar las fallas de

mercado existentes, fomentar determinadas actividades y/o alcanzar objetivos en materia de distribución del ingreso.

Cuando la actividad gravada se ejerce por un mismo contribuyente en dos o más jurisdicciones son de aplicación las normas contenidas en el Convenio Multilateral<sup>6</sup>.

La influencia negativa del impuesto a los Ingresos Brutos sobre los márgenes de rentabilidad viene determinada tanto por el lado de la disminución de los ingresos percibidos por la venta de bienes, como por el incremento de los costos de los insumos para producirlos (pérdida de competitividad).

En el primer caso, en la medida en que el productor pueda trasladar en algún grado la carga impositiva al consumidor, el precio final pagado por este último aumentará induciéndolo a reducir las cantidades que compra del bien, disminuyendo de esta forma las ventas por el lado de las cantidades.

En tanto, respecto a la pérdida de competitividad, el incremento en los costos de producción viene dado por el aumento de precios de los insumos, que se produce como consecuencia de gravar con el impuesto a los bienes intermedios.

### **III.2 El Convenio Multilateral**

Recordando que el hecho imponible del impuesto a los ingresos brutos es el ejercicio habitual y a título oneroso, en una jurisdicción determinada, de las actividades de comercio, industria, y profesión, entre otras; el mismo constituye un proceso único y económicamente inseparable, pudiendo ocurrir entonces que

---

<sup>6</sup> En las estimaciones de carga fiscal legal del IIB llevadas a cabo en el presente trabajo se trata con “contribuyentes locales”.

aquellas empresas que desarrollan su actividad en más de una provincia, tengan gravado el mismo ingreso en varias jurisdicciones.

En consecuencia, el Convenio Multilateral es un acuerdo que se firmó entre las provincias en el año 1977 con el objetivo de evitar la doble imposición sobre una misma base, estableciendo las pautas según las cuáles ésta se distribuye entre las jurisdicciones. El Convenio establece que los ingresos brutos del contribuyente se asignarán entre las jurisdicciones teniendo en cuenta la proporción de gastos y de ingresos originados en cada jurisdicción. Una vez realizada la distribución, cada provincia ejercerá su poder tributario sobre la porción asignada con entera libertad. De este modo, a través del Convenio se aspira a garantizar que efectivamente el impuesto a los ingresos brutos verifique el principio de territorialidad.

### **III.2.1 Situaciones de aplicación del Convenio**

El artículo 1 del Convenio establece que las actividades a las que se refiere el mismo *“son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas...”*. Asimismo, el mencionado artículo realiza un detalle de las posibles situaciones que se encontrarían comprendidas en el Convenio:

- Cuando la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en una u otras, ya sea parcial o totalmente;

- Cuando todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y administración se ejerza en una u otras;
- Cuando el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas o compras en otras;
- Cuando el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios con respecto a personas, bienes o cosas radicados o utilizados económicamente en una u otras jurisdicciones.

### **III.2.2 Régimen General**

Existe un Régimen General, que reparte los ingresos brutos un 50% en proporción de los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción, y el 50% restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada una de ellas.

Cabe destacar que dentro de los gastos a los que se refiere el párrafo previo se incluyen las erogaciones originadas por ejercicio de la actividad, computándose entonces: sueldos, jornales y toda otra remuneración, combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación, alquileres, primas de seguros y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etc. No se incluyen los costos de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades industriales; el costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización; gastos de publicidad y propaganda; tributos (ya sean nacionales, provinciales y municipales); intereses; y honorarios a directores.

### **III.2.3 Regímenes Especiales**

Por otro lado, el Convenio contempla también Regímenes Especiales para ciertas actividades específicas. Cada uno de ellos tendrá una distribución especial de los ingresos brutos entre la provincia en donde se encuentre la oficina, casa central, administración o domicilio y la jurisdicción en donde se desempeña la actividad en cuestión. Los casos contemplados y el modo en que se distribuyen las bases imponibles en las jurisdicciones son los siguientes :

- Actividades de la construcción, cuya oficina, escritorio, administración o dirección se encuentre en una jurisdicción y se ejecuten obras en otras. Se atribuirá el 10% de los ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada la sede y el 90% a la jurisdicción donde se realicen las obras;
- Entidades de seguros, capitalización y ahorro, de créditos y de ahorro y préstamo (no incluidas en el Régimen de Entidades Financieras), cuando la administración o sede central se encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o servicios situadas en otra, se atribuirá a esta última el 80% de los ingresos provenientes de la operación y el 20% a la jurisdicción donde se localice la administración o sede central.
- Entidades financieras. Cada fisco podrá gravar la parte de los ingresos que le corresponda en proporción a la sumatoria de los ingresos, intereses pasivos y actualizaciones pasivas de cada jurisdicción en la que la entidad tuviere casas o filiales habilitados.
- Empresas de transporte que desarrollen actividades en varias jurisdicciones, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos



brutos correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje.

- Profesiones liberales ejercidas por personas que desarrollen actividades profesionales en jurisdicciones distintas a donde se encuentren ubicadas sus oficinas o estudios, las primeras podrán gravar el 80% de la base imponible, mientras que las últimas el 20% restante.
- Rematadores, comisionistas u otros intermediarios, tendrán igual tratamiento que en la situación anterior.
- Prestamistas hipotecarios o prendarios, con domicilio en jurisdicción distinta a donde se sitúen los bienes que sirven de garantía, se les gravará el 20% y 80% respectivamente en cada jurisdicción.
- Industrias vitivinícolas y azucareras, y productos agropecuarios. Cuando el productor efectúe la venta de estos productos fuera de la jurisdicción en cuestión, se considerará como monto imponible al precio mayorista de los productos, gravando la jurisdicción donde se comercialice el producto la diferencia entre los ingresos brutos obtenidos y el referido monto imponible.

### **III.3 El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (1993)**

Tal como ya fuera destacado en numerosas oportunidades, el impuesto a los Ingresos Brutos constituye un gravamen sumamente distorsivo y que atenta contra la eficiencia económica en múltiples aspectos:

A fin de eliminar estas distorsiones y muchas otras más con relación a otros aspectos tributarios, es que se firmó el *Pacto Federal para la producción y el crecimiento* entre las provincias.

La importancia de este pacto radica en que tuvo entre sus objetivos una reestructuración parcial del régimen tributario argentino. Para ello, tanto las provincias como la Nación asumieron compromisos en materia impositiva tendientes a eliminar distorsiones y aumentar la competitividad global de la economía. Dentro de los compromisos asumidos se promovía otorgar la exención del **impuesto a los Ingresos Brutos** a las siguientes actividades (hasta concretar su sustitución por un gravamen general al consumo):

- Producción primaria;
- Prestaciones financieras de entidades comprendidas en la Ley 21.526 de Entidades Financieras;
- Compañías de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios, A.F.J.P. y compañías de seguros;
- Compraventa de divisas;
- Industria manufacturera, excepto las ventas a consumidores finales;
- Prestaciones de servicios de electricidad, gas y agua, excepto las destinadas a uso domiciliario;
- Construcción de inmuebles.

Estas exenciones no contemplaban a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.

Todas las provincias argentinas adhirieron al Pacto Fiscal y en distinta medida realizaron reformas en sus sistemas tributarios orientadas en la dirección de los compromisos asumidos.

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de las actividades que el Pacto Fiscal promovía eximir y el efectivo cumplimiento o no por parte de la provincia de Córdoba. Se consideraron únicamente las actividades que se analizan en el presente estudio, por lo tanto quedan excluidas: Pesca, Explotación de minas y canteras, y dentro de la Industria Manufacturera los productos del tabaco, productos textiles, prendas de vestir, cueros y calzados, madera y artículos de madera y corcho, papel y productos de papel, edición e impresión de repr. De grab., coque, productos refinados del petróleo y comb. Nucl., metales comunes, productos elaborados de metal, ex.maq. y equipos, maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p., equipos y aparatos de radio, tv y comunicaciones, partes y accesorios para autos y motores, otros equipos de transporte, muebles; industria manufacturera n.c.p.

Al respecto, es necesario realizar las siguientes aclaraciones:

- A fin de gozar de la exención dispuesta por el Pacto, la empresa debe encontrarse radicada en la provincia que otorga el beneficio, quedando gravada en todas las demás provincias de acuerdo a la porción de poder tributario asignada a cada una de éstas por el Convenio Multilateral. De este modo, mediante esta condición cada administración provincial logra conservar los ingresos originados en la tributación de firmas de otras provincias que venden en su territorio. Debido a la falta de información acerca de qué proporción es vendida por cada empresa en la provincia de origen y en el resto de las jurisdicciones, en este trabajo no se considera la carga fiscal ejercida por medio de dicho Convenio, analizándose sólo la carga fijada sobre las actividades radicadas en la propia jurisdicción.

- Por otro lado, es importante aclarar que el Pacto Fiscal exime a la industria manufacturera y al agro exceptuando las ventas a consumidores finales. En el presente análisis no se ha tenido en cuenta esta excepción, dada la imposibilidad de conseguir datos respecto al porcentaje que representan las ventas a consumidor final dentro del agro y de la industria para cada provincia. Es por ello que se consideró directamente como “exento” todo el valor bruto de la producción.
- En el cuadro se ha denominado como “exentas” también a aquellas actividades que tienen alícuota 0%. Es menester aclarar que una exención brinda más seguridad jurídica que la tasa del 0%, ya que podría resultar más fácil modificar una Ley Impositiva (que se vota todos los años) que un Código Tributario. Además, si bien el gravamen con alícuota cero tiene la desventaja de obligar al contribuyente a mantener cierta relación con el fisco, vía la confección de declaraciones juradas u otros informes periódicos, en materia de la carga tributaria impuesta a la actividad (que es la cuestión bajo análisis en el presente trabajo) los dos conceptos “alícuota 0%” y “exención” serían equivalentes.
- Para ciertos rubros existen ramas dentro de las cuales algunas actividades se encuentran gravadas y otras exentas. Esos casos han sido presentados en el Cuadro como E (exento) y G (gravado), haciendo las aclaraciones acerca de cuáles son las actividades gravadas y cuáles no.

**Cuadro 1: Actividades exentas según Pacto Federal en Córdoba**

Actividades	Exenta / Gravada
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	E
Industria Manufacturera	E
15. Alimentos y bebidas	E
24. Sustancias y productos químicos	E
25. Productos de caucho y plástico	E
26. Otros productos min. no metálicos	E
29. Maquinaria y equipo n.c.p.	E
34. Veh. Automotores, remolques y semir.	E
Electricidad	G,E (1)
Gas	G,E (2)
Agua	E
Construcción	E
Instituciones financieras	G
Seguros de renta vitalicia (AFJP)	G
Otros seguros personales y patrimoniales	G

Notas: (1) Exento: El suministro de energía eléctrica a empresas agropecuarias, mineras, industriales, de grandes consumos y el transporte y/o la compraventa de energía eléctrica en el mercado mayorista; y el suministro de energía eléctrica a usuarios comprendidos en la categoría de tarifa social (villas de emergencia). (2) Exentas: Suministro de gas y electricidad a consumidores no residenciales.

Aclaración: la enumeración de las actividades de Industria Manufacturera son las mismas referencias del Censo.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de legislación tributaria provincial.

## **IV. La Carga Fiscal Provincial**

En esta sección se exponen los resultados del análisis para el impuesto a los Ingresos Brutos según lo establecido en la Ley Tarifaria. La información se presentará tanto para el promedio de las actividades productivas como para los siete grupos de actividades definidos en el segundo informe parcial para el caso de CIS, luego de exponer la importancia de este impuesto frente a los ingresos propios y los ingresos corrientes que percibe la Provincia de Córdoba.

### **IV.1 La importancia del Impuesto a los Ingresos Brutos en el financiamiento subnacional**

El principal impuesto, y por un amplio margen, que administra la Provincia ha sido en la última década el Impuesto a los Ingresos Brutos. Más de la mitad de los recursos tributarios propios de las provincias provienen de lo recaudado en concepto de este impuesto (56% promedio en 12 años), no siendo menor también su participación dentro de los recursos corrientes que percibe la provincia (Cuadro 2).

**Cuadro 2: Participación del Impuesto a los Ingresos Brutos promedio en el financiamiento subnacional (1992 - 2004)**

Córdoba	En ingresos tributarios propios	En ingresos corrientes
	56%	21%

*Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de datos oficiales.*

Dentro de los recursos tributarios, le sigue en importancia relativa el Impuesto Inmobiliario, generando un 27% de los recursos tributarios totales. El tercer puesto se encuentra ocupado por el Impuesto de Sellos.

**Cuadro 3: Participación del Impuesto a los Ingresos Brutos en los recursos tributarios**

	1992 – 2004
Imp. a los Ingresos Brutos	56%
Impuesto Inmobiliario	27%
Impuesto a los Sellos	9%
Otros	8%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos oficiales.

## IV.2 La carga fiscal del IIB

### IV.2.1 Montos Mínimos y Montos Fijos

El fisco prevé que todas las actividades productivas tributen como mínimo una suma determinada de dinero. Es decir, si el cargo que se deriva del método convencional es menor al importe mínimo fijado, se tributa este último. En aquellas actividades que poseen una baja facturación por unidad económica, la presencia de montos mínimos hace muchas veces que la alícuota efectiva supere a la alícuota teórica.

También existe el Régimen Especial de Tributación o “Impuesto Fijo” que abarca un limitado número de actividades y consiste en una tributación mensual y definitiva de importes fijados anualmente por ley impositiva. Para acceder al Régimen se requiere desarrollar la actividad sin empleados y con un activo – excepto inmuebles - que no supere el valor determinado en la ley impositiva anual (actualmente es de \$12.600). No pueden adherir al Régimen Especial los

responsables inscriptos en el IVA ni las sociedades o asociaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades que comprende este Régimen Especial son:

- a) Enseñanza, artesanado y servicios personales.
- b) Microemprendimientos productivos patrocinados por el Estado nacional, provincial o municipal.
- c) Prestación de servicios de reparaciones y lavandería.
- d) Hospedajes, pensiones y otros lugares de alojamiento.
- e) Comercio al por menor directamente al consumidor final.

**Cuadro 4: Régimen de Mínimos**

Provincia de Córdoba	Condiciones	Mínimo Anual
Actividades en general		\$1.470
Comercio al por menor y otras actividades (las mismas que las contempladas por el Régimen Especial de Tributación)	1 empl. y un activo <21.000	\$714
	3 empl. y un activo <35.000	\$1.008
Régimen Especial	Sin empleados y activo <12.600	\$420 <sup>(1)</sup>
		\$588 <sup>(2)</sup>

Notas: (1) Para las siguientes actividades: microemprendimientos productivos; enseñanza, artesanado y servicios personales; actividades artísticas individuales. (2) Para las siguientes actividades: servicios de reparaciones y lavandería; hospedajes, pensiones y otros lugares de alojamiento; comisiones de corredores inmobiliarios; comercio al por menor minorista.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Ley Impositiva 2005.

**IV.2.2 Alícuotas legales**

El artículo 15 de la ley tarifaria fija en tres coma cinco por ciento (3,5%) la alícuota general del IIB, que se aplica a todas las actividades, con excepción de las que tienen alícuotas especiales.



En el Cuadro 5 se encuentran detalladas esas alícuotas especiales con las que se gravan las diferentes actividades productivas.

**Cuadro 5: Alícuotas legales del Impuesto a los Ingresos Brutos**

Actividades	Alícuota
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvic.	1%
Industria Manufacturera	1,5% (0,25% para combustibles líquidos y GNC)
Elab. de prod alimenticios y bebidas	
Fabric de sustancias y prod químicos	
Fabric de metales comunes	
Fabric de maquinaria y equipo n.c.p.	
Fabric de veh autom, remol.y semirem.	
Electricidad	General: 2,5%
Gas (1)	Residenciales: 5%
Agua	Cooperativas: 2%
Construcción	3%
Comercio mayorista	Entre 2.5% y 1.75%
Productos agropecuarios	
Alimentos y bebidas	
Textiles y cueros	
Artículos para el hogar y la construcción	
Medicamentos	Entre 1% y 0.70%
Leche fluida o en polvo	
Vehículos, maquinarias y aparatos	Entre 2.5% y 1.75%
Comercio minorista	Entre 3.5% y 2.45%
Alimentos y bebidas	
Indumentaria	
Artículos para el hogar	
Agroquímicos y semillas	Entre 1% y 0.70%
Joyas, art. De fotografía y óptica	Entre 3.5% y 2.45%
Restaurantes	3,5%
Transporte y almacenamiento	3,5%
Telecomunicaciones	6.0%
Instituciones financieras	Entre 2.5% y 4%
Seguros de renta vitalicia (AFJP)	3.5%
Otros seguros personales y patrimoniales	5.0%
Actividades inmobiliarias	Entre 4.1% y 3.5%
Actividades jurídicas y de contabilidad	3.5%
Publicidad	
Servicios sociales y de salud privada	

Nota (1): suministro de gas destinado a empresas industriales y para la generación de energía eléctrica 1%.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a legislación impositiva provincial para el año 2005.

Cabe destacar que el análisis del presente apartado se realiza sin tener en cuenta la imposición por Convenio Multilateral. Tampoco se consideran aquellos casos establecidos por el Pacto Fiscal que aplican una alícuota cero al sector cuando la provincia ha cumplido con la exención exigida por el mismo.

Respecto a esta estructura de alícuotas vigente en la actualidad, es necesario destacar que en la provincia de Córdoba se aplican dos alícuotas diferentes de acuerdo al monto de facturación anual. Es así que se realiza una reducción del 30% en las alícuotas aplicables a todas las actividades, en los casos en que la sumatoria de bases imponibles del ejercicio fiscal previo no supere la suma de \$360.000.

#### **IV.2.3 Análisis según grupos de actividad**

En este apartado se analizan las alícuotas expuestas en el inciso anterior por grupo de actividad.

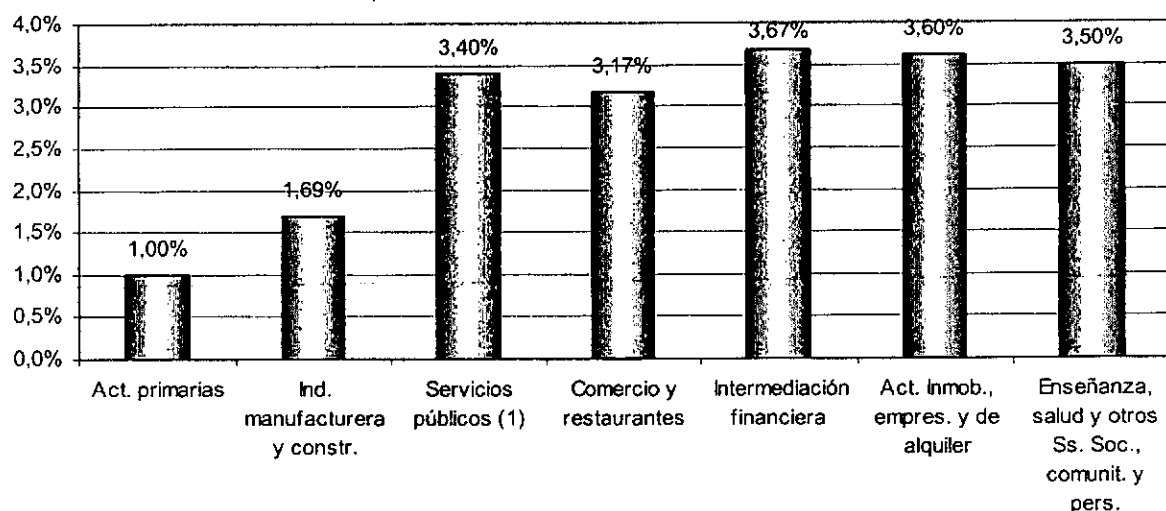
Se exponen en el Gráfico 1 los resultados promedios de los grupos de actividades. Dichos promedios “simples” son calculados sin tener en cuenta las exenciones, los montos mínimos ni los descuentos según monto de facturación<sup>7</sup>. Si se contemplara lo establecido en el Pacto, tanto las actividades primarias como así también para la industria y la construcción el valor de la alícuota sería del 0%.

El orden en el cual se presentan los grupos de actividades siguen aquél presentado en el Censo Nacional Económico, el mismo que se tomó en cuenta en el Segundo Informe Parcial.

---

<sup>7</sup> Todos estos conceptos serán contemplados en el Cuarto Informe Parcial donde se expondrá la carga fiscal promedio “ponderada” o carga “efectiva”.

**Gráfico 1: Alicuotas legales promedio del IIB según grupo de actividades**



Nota (1): suministro de electricidad, gas y agua; transporte y almacenamiento; correo y telecomunicaciones.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea según legislación impositiva año 2005

Las actividades de intermediación financiera representan el promedio simple legal más alto, seguido por la actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler y enseñanza, salud y otros servicios sociales, comunitarios y personales. Las alícuotas legales más bajas se encuentran en el grupo de las actividades primarias, industria y construcción, seguido por la actividad comercial y de restaurantes y los servicios públicos.

A continuación se presentan y analizan las actividades que componen cada grupo antes mencionado.

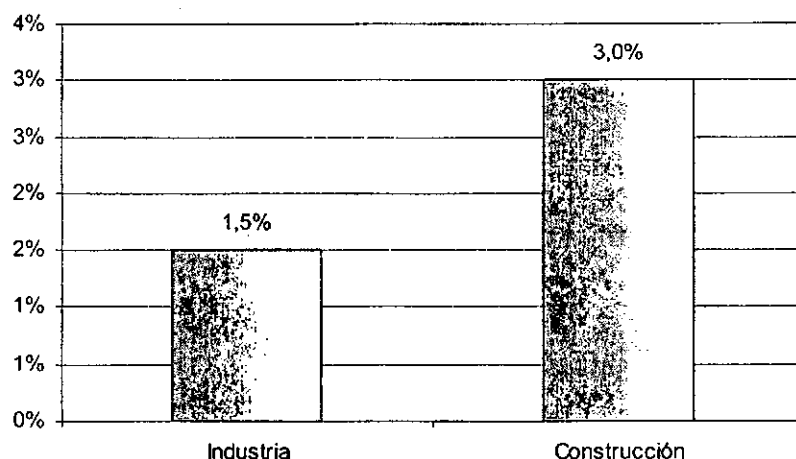
#### **IV.2.3.1 Actividades Primarias**

Este grupo de actividades se encuentra gravado con una alícuota especial del 1%, aunque todas las actividades del mismo también están contempladas dentro de las exenciones del Pacto Federal y que Córdoba ha cumplido con el mismo.

#### IV.2.3.2 Industria Manufacturera y Construcción

La construcción duplica la carga legal de la industria, aunque ambas actividades se encuentran por debajo de la alícuota general legal del 3,5%.

**Gráfico 2: Alícuotas legales promedio grupo “Industria Manufacturera y Construcción”**



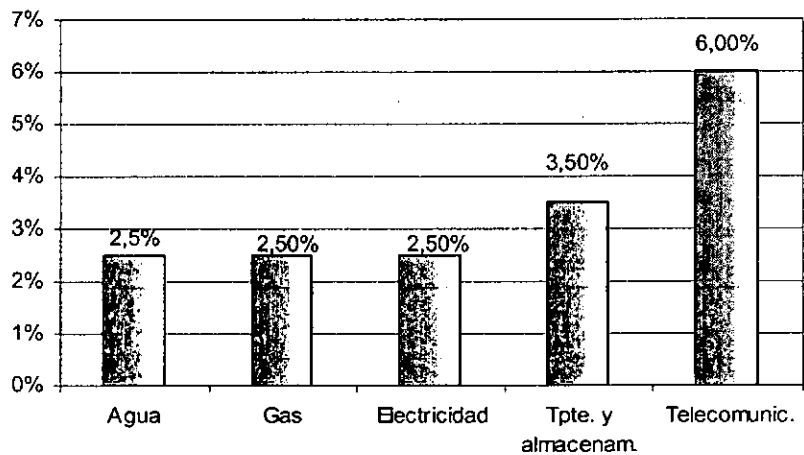
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

#### IV.2.3.3 Servicios Públicos

Dentro de este grupo se encuentran las actividades de Electricidad, Gas, Agua, Transporte y Almacenamiento, y Telecomunicaciones. Las alícuotas legales para cada una de ellas se presentan en el Gráfico 3.

El promedio del grupo es 3,40% y la actividad más gravada es telecomunicaciones, más del doble que electricidad, gas y agua. Estas tres últimas actividades mencionadas están gravadas con una tasa general del 2,5% si bien los usuarios residenciales soportan una alícuota del 5% mientras que las cooperativas del 2%, según se detalló en el Cuadro 5.

**Gráfico 3: Alícuotas legales promedio grupo "Servicios Públicos"**

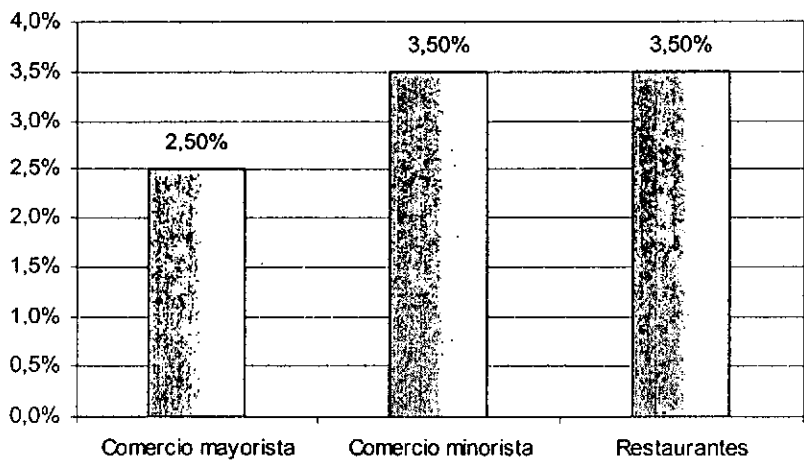


Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

**IV.2.3.4 Comercio y restaurantes**

Este grupo incluye las actividades de comercio mayorista, comercio minorista, y restaurantes. El promedio legal es 3,17% ya que el comercio mayorista se encuentra gravado a una tasa inferior a la general.

**Gráfico 4: Alícuotas legales promedio grupo "Comercio y restaurantes"**



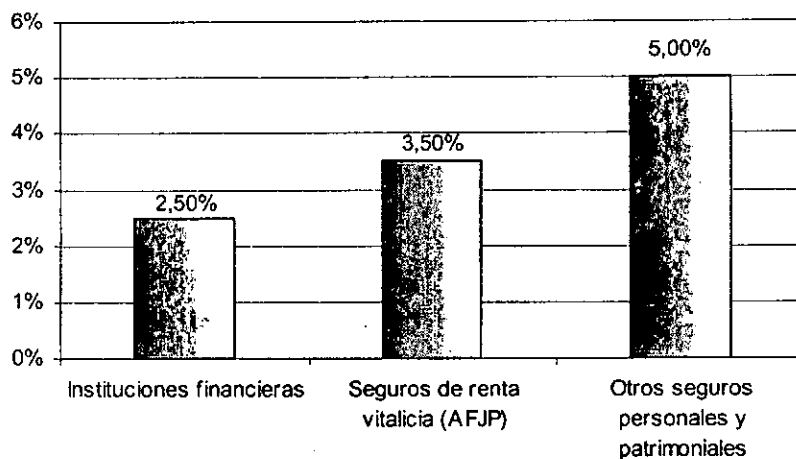
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

#### **IV.2.3.5 Intermediación financiera**

Este grupo incluye las actividades de intermediación financiera, AFJP's y otros seguros. La alícuota promedio del grupo es del 3.67%, mayor que la alícuota establecida en el Código como general.

Aquí se presentan valores distantes entre las actividades, duplicando la mayor alícuota (otros seguros) a la menor (instituciones financieras).

**Gráfico 5: Alícuotas legales promedio grupo "Intermediación financiera"**



*Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea*

Es importante tener en cuenta que en este grupo la base imponible no está constituida por el monto total de los ingresos brutos devengados en el período fiscal. Para el caso de las entidades financieras, la base imponible es la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas. Para los seguros y reaseguros la base está constituida por la totalidad de los ingresos derivados en concepto de primas netas de anulaciones; los recargos y adicionales a las primas netas de anulaciones, las rentas y alquileres percibidos y el resultado de la

realización de sus bienes y las participaciones en el resultado de los contratos de reaseguros pasivos y todo otro ingreso proveniente de la actividad financiera, pero no se computarán como ingresos las partes de las primas destinadas a reservas matemáticas y de riesgos en curso, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones con asegurados. Es decir, en ambos casos las bases imponibles son menores a los ingresos brutos respectivos.

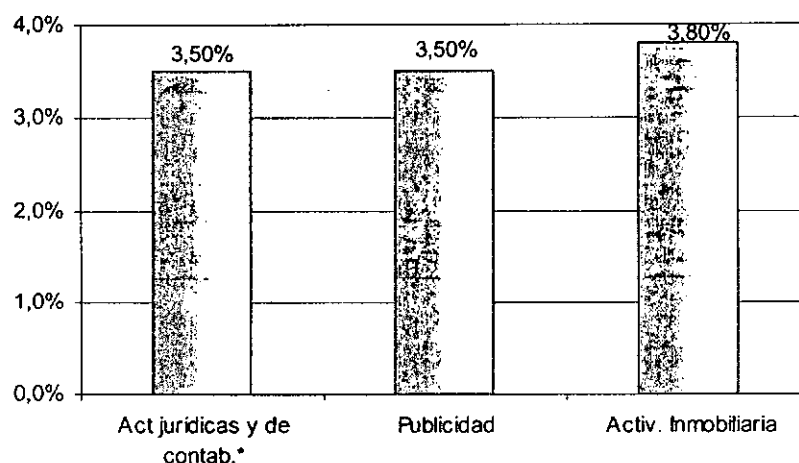
#### ***IV.2.3.6 Inmobiliaria, empresarial y de alquiler***

Dentro de un promedio de 3.60% se encuentran las actividades representadas en el Gráfico 6, siendo la más alta de las alícuotas promedio la correspondiente a la actividad inmobiliaria.

Es importante rescatar que la actividad inmobiliaria, además de cargar con la alícuota más alta, para la determinación de su base imponible debe computarse como ingreso gravado los tributos que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo, es decir, una base mayor a la simple facturación de la locación misma.

En el caso de los honorarios profesionales no se computarán como ingresos brutos gravados aquellos retenidos por los Consejos, Colegios o Asociaciones Profesionales, cuando se encuentre previsto en sus respectivas leyes, decretos o reglamentos, con excepción de aportes previsionales, cuotas sociales a las entidades citadas y todo otro concepto que configure un gasto necesario para el ejercicio profesional. Además, los honorarios profesionales que provengan de cesiones o participaciones efectuadas por otros profesionales, cuando estos últimos computen la totalidad de sus ingresos como materia imponible.

**Gráfico 6: Alícuotas legales promedio grupo "Inmobiliaria, empresarial y de alquiler"**



Nota: \* teneduría de libros y auditoría; asesoría en mat de impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión pública; asesoramiento empresarial y en materia de gestión.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea

#### **IV.2.3.7 Enseñanza, salud y otros servicios comunitarios**

Este grupo no tiene alícuotas especiales más allá de la alícuota general del 3,5%, si bien varias de sus actividades se encontrarían exentas como se verá en el próximo informe parcial. Las actividades que lo conforman son, a saber: Actividades de organizaciones empresariales, profesionales, sindicales, religiosas, políticas y otras; Radio y Televisión; Enseñanza privada; Actividades deportivas y otras de esparcimiento; y Servicios sociales y de salud privada.

Es útil mencionar que los ingresos provenientes del ejercicio de la actividad literaria, pictórica, escultural o musical y cualquier otra actividad artística individual, hasta el importe mensual que la Ley Impositiva establezca no se computará como base imponible siempre que dicha actividad no sea desarrollada en forma de empresa y/o con establecimiento comercial.



## **V. Conclusión del informe parcial**

El hecho que un impuesto como el de Ingresos Brutos tenga una estructura de alícuotas homogénea puede ser una cualidad negativa debido a que profundiza el efecto cascada (el pago de impuestos sobre impuestos) a medida que se avanza en el proceso de producción y comercialización de un bien. Es decir, en este escenario es conveniente que las actividades de comercialización y de servicios soporten la mayor carga del impuesto mientras que sería aconsejable lo contrario para las de producción.

Pero si los sectores primarios y secundarios se encuentran desgravados como es el caso actual de Córdoba, a través del Pacto Federal, la homogeneidad se convierte en una cualidad deseable ya que evita distorsiones de precios relativos y facilita la administración del tributo.

En el gráfico 1 se observa que la estructura de alícuotas se condice con lo antes expuesto, donde en términos generales las actividades primarias presentan los menores valores, luego la industria y construcción en el escalón siguiente para llegar con los servicios a las alícuotas mas altas en términos legales. En el próximo informe parcial se analizarán dichas alícuotas en términos efectivos, es decir, incorporando los efectos de montos mínimos, exenciones y deducciones.

## **Anexo 1: Convenio Multilateral**

### **AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO**

Artículo 1º - Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquéllas que se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas, ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. Así, se encuentran comprendidos en él los casos en los que se configure alguna de las siguientes situaciones:

a) que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o totalmente;

b) que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y administración se ejerza en otra u otras;

c) que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas o compras en otra u otras;

d) que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios con respecto a personas, bienes o cosas radicados o utilizados económicamente en otra u otras jurisdicciones.

Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3º, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades

estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso (correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc.).

## REGIMEN GENERAL

Art. 2º - Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente, originados por las actividades objeto del presente Convenio, se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma:

a) el 50% (cincuenta por ciento) en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción;

b) el 50% (cincuenta por ciento) restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción, en los casos de operaciones realizadas por intermedio de sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes similares, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia; a los efectos del presente inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1º deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios.

Art. 3º - Los gastos a que se refiere el artículo 2º, son aquéllos que se originan por el ejercicio de la actividad.

Así, se computarán como gastos: los sueldos, jornales y toda otra remuneración; combustibles y fuerza motriz; reparaciones y conservación; alquileres, primas de seguros y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etc. También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias.

No se computarán como gastos:

a) el costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades comerciales; se entenderá como materia prima, no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado;

b) el costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización;

c) los gastos de propaganda y publicidad;

d) los tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas, contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etc.);

e) los intereses;

f) los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades, en los importes que excedan del 1% (uno por ciento) de la utilidad del balance comercial.

Art. 4º - Se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción, cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle (por ej.: de dirección, de administración, de fabricación, etc.), aun cuando la erogación que él representa se efectúe en otra. Así, los sueldos, jornales y otras remuneraciones se consideran soportados en la jurisdicción en que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren.

Los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza, se distribuirán en la misma proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación con respecto a éstos. En caso contrario, el contribuyente deberá distribuirlos mediante estimación razonablemente fundada.

Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible.

Art. 5º - A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible o total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior.

De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior.

## REGIMENES ESPECIALES

Art. 6º - En los casos de actividades de la construcción, incluidas las de demolición, excavación, perforación, etc., los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en una jurisdicción y ejecuten obras en otras, se atribuirá el 10% (diez por ciento) de los ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y corresponderá el 90% (noventa por ciento) de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen las obras. No podrá discriminarse, al considerar los ingresos brutos, importe alguno en concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos, proyectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa.

Art. 7º - En los casos de entidades de seguros, de capitalización y ahorro, de créditos y de ahorro y préstamo no incluidas en el régimen del artículo siguiente, cuando la administración o sede central se encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o personas situadas o domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a esta o estas jurisdicciones, el 80% (ochenta por ciento) de los ingresos provenientes de la operación y se atribuirá el 20% (veinte por ciento) restante a la jurisdicción donde se encuentre situada la administración o sede central, tomándose en cuenta el lugar de radicación o domicilio del asegurado al tiempo de la contratación en los casos de seguros de vida o de accidente.

Art. 8º - En los casos de contribuyentes comprendidos en el régimen de la ley de entidades financieras, cada fisco podrá gravar la parte de ingresos que le corresponda en proporción a la sumatoria de los ingresos, intereses pasivos y actualizaciones pasivas de cada jurisdicción en la que la entidad tuviere casas o filiales habilitadas por la Autoridad de Aplicación, respecto de iguales conceptos de todo el país. Se excluirán los ingresos correspondientes a operaciones realizadas en jurisdicciones en las que las entidades no tuvieran casas o filiales habilitadas, los que serán atribuidos en su totalidad a la jurisdicción en la que la operación hubiere tenido lugar.

Art. 9º - En los casos de empresas de transportes de pasajeros o cargas que desarrollen sus actividades en varias jurisdicciones, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos brutos correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje.

Art. 10 - En los casos de profesiones liberales ejercidas por personas que tengan su estudio, consultorio u oficinas o similares en una jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en otras, la jurisdicción en la cual se realiza la actividad podrá gravar el 80% (ochenta por ciento) de los honorarios en ella percibidos o devengados, y la otra jurisdicción el 20% (veinte por ciento) restante.

Igual tratamiento se aplicará a las consultorías y empresas consultoras.

Art. 11 - En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrá gravar el 80% (ochenta por ciento) de los ingresos brutos originados por estas operaciones y la otra, el 20% (veinte por ciento) restante.

Art. 12 - En los casos de prestamistas hipotecarios o prendarios que no estén organizados en forma de empresa y tengan su domicilio en una jurisdicción y la garantía se constituya sobre los bienes inmuebles o muebles situados en otra, la jurisdicción donde se encuentren éstos podrá gravar el 80% (ochenta por ciento) de los ingresos brutos producidos por la operación y la otra jurisdicción el 20% (veinte por ciento) restante.

Art. 13 - En el caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así como en el caso de los productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, en bruto, elaborados y/o semielaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados por el propio productor sin facturar, para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los mismos se vendan en el estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración, enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros, el monto imponible para dicha jurisdicción será el precio mayorista, oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de expedición. Cuando existan dificultades para establecer el mismo, se considerará que es equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del precio de venta obtenido. Las jurisdicciones en las cuales se comercialicen las mercaderías podrán gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible, con arreglo al régimen establecido por el artículo 2º.

En el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente la materia prima a los productores, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. La diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe será distribuido entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad, conforme al régimen establecido por el artículo 2º. Igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los

productores, acopiadores o intermediarios de quebracho y de algodón por los respectivos industriales y otros responsables del desmote, y en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y frutas.

En el caso de la mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de los restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora y siempre que ésta no grave la actividad del productor, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el 50% (cincuenta por ciento) del precio oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de adquisición. Cuando existan dificultades para establecer este precio, se considerará que es equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del precio de venta obtenido. La diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el importe mencionado será atribuida a las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos, conforme al régimen del artículo 2º. En los casos en que la jurisdicción productora grave la actividad del productor, la atribución se hará con arreglo al régimen del artículo 2º.

## INICIACION Y CESE DE ACTIVIDADES

Art. 14 - En los casos de iniciación o cese de actividades en una o varias jurisdicciones no será de aplicación el régimen del artículo 5º, sino el siguiente:

a) iniciación: en caso de iniciación de actividades comprendidas en el régimen general en una, varias o todas las jurisdicciones, la o las jurisdicciones en que se produzca la iniciación podrán gravar el total de los ingresos obtenidos en cada una de ellas, pudiendo los demás gravar los ingresos restantes con aplicación de los coeficientes de ingresos y gastos que le correspondan. Este



régimen se aplicará hasta que se produzca cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 5º.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación para las actividades comprendidas en los artículos 6º a 12, ambos inclusive.

En los casos comprendidos en el artículo 13, se aplicarán las normas establecidas por el mismo, salvo en la parte de los ingresos que se distribuye según el régimen general, en cuyo caso será de aplicación el sistema establecido en el primer párrafo del presente inciso;

b) cese: en los casos de cese de actividades en una o varias jurisdicciones, los contribuyentes o responsables deberán determinar nuevos índices de distribución de ingresos y gastos conforme al artículo 2º, los que serán de aplicación a partir del día primero del mes calendario inmediato siguiente a aquél en que se produjere el cese.

Los nuevos índices serán la resultante de no computar para el cálculo, los ingresos y gastos de la jurisdicción en que se produjo el cese.

En el ejercicio fiscal siguiente al del cese, se aplicará el artículo 5º prescindiéndose del cómputo de los ingresos y gastos de la o las jurisdicciones en que se produjo el mismo.

## ORGANISMOS DE APLICACION

Art. 15 - La aplicación del presente Convenio estará a cargo de una comisión plenaria y de una comisión arbitral.

## DE LA COMISION PLENARIA

Art. 16 - La comisión plenaria se constituirá con dos representantes por cada jurisdicción adherida -un titular y un suplente- que deberán ser

especialistas en materia impositiva. Elegirá de entre sus miembros en cada sesión un presidente y funcionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, decidiendo el presidente en caso de empate.

Art. 17 - Serán funciones de la comisión plenaria:

- a) aprobar su reglamento interno y el de la comisión arbitral;
- b) establecer las normas procesales que deberán regir las actuaciones ante ella y la comisión arbitral;
- c) sancionar el presupuesto de gastos de la comisión arbitral y controlar su ejecución;
- d) nombrar el presidente y vicepresidente de la comisión arbitral de una terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación;
- e) resolver con carácter definitivo los recursos de apelación a que se refiere el artículo 25, dentro de los 90 (noventa) días de interpuestos;
- f) considerar los informes de la comisión arbitral;
- g) proponer, ad referendum de todas las jurisdicciones adheridas, y con el voto de la mitad más uno de ellas, modificaciones al presente convenio sobre temas incluidos expresamente en el orden del día de la respectiva convocatoria. La comisión arbitral acompañará a la convocatoria todos los antecedentes que hagan a la misma.

Art. 18 - La comisión plenaria deberá realizar por lo menos dos reuniones anuales.

## DE LA COMISION ARBITRAL

Art. 19 - La comisión arbitral estará integrada por un presidente, un vicepresidente, siete vocales titulares y siete vocales suplentes y tendrá su asiento en la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación.

Art. 20 - El presidente de la comisión arbitral será nombrado por la comisión plenaria de una terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación. El vicepresidente se elegirá en una elección posterior entre los dos miembros propuestos restantes. Los vocales representarán a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires y a cada una de las cinco zonas que se indican a continuación, integradas por las jurisdicciones que en cada caso se especifican:

Zona Noreste: Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa.

Zona Centro: Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos.

Zona Norte: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca.

Zona Cuyo: La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis.

Zona Sur o Patagónica: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El presidente, vicepresidente y los vocales deberán ser especialistas en materia impositiva.

Las jurisdicciones no adheridas no podrán integrar la comisión arbitral.

Art. 21 - Los vocales representantes de las zonas que se mencionan en el artículo anterior durarán en sus funciones dos años y se renovarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) dentro de cada zona se determinará el orden correspondiente a los vocales, asignando por acuerdo o por sorteo un número correlativo a cada una de las jurisdicciones integrantes de la zona respectiva;

b) las jurisdicciones a las que correspondan los cinco primeros números de orden tendrán derecho a designar los vocales para el primer período de dos años, quienes serán sustituidos al cabo de este término por los representantes de las jurisdicciones que correspondan, según lo que acordaren los integrantes de cada zona o que sigan en orden de lista, y así sucesivamente hasta que todas las jurisdicciones hayan representado a su respectiva zona;

c) a los efectos de las futuras renovaciones las jurisdicciones salientes mantendrán el orden preestablecido.

Art. 22 - Las jurisdicciones que no formen parte de la comisión tendrán derecho a integrarla mediante un representante cuando se susciten cuestiones en las que sean parte.

La comisión sesionará válidamente con la presencia del presidente o vicepresidente y de no menos de cuatro vocales. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los vocales y representantes presentes. El presidente decidirá en caso de empate.

Art. 23 - Los gastos de la comisión serán sufragados por las distintas jurisdicciones adheridas, en proporción a las recaudaciones obtenidas en el penúltimo ejercicio en concepto del impuesto al que se refiere este Convenio.

Art. 24 - Serán funciones de la comisión arbitral:

a) dictar de oficio o a instancia de los Fiscos adheridos normas generales interpretativas de las cláusulas del presente convenio, que serán obligatorias para las jurisdicciones adheridas;

b) resolver las cuestiones sometidas a su consideración, que se originen con motivo de la aplicación del convenio en los casos concretos; las decisiones serán obligatorias para las partes en el caso resuelto;

c) resolver las cuestiones sometidas a su consideración que se originen con motivo de la aplicación de las normas de procedimiento que rijan la actuación ante el organismo;

d) ejercer iguales funciones a las indicadas en los incisos anteriores con respecto a cuestiones que originen o se hayan originado y estuvieran pendientes de resolución con motivo de la aplicación de los convenios precedentes;

e) proyectar y ejecutar su presupuesto;

f) proyectar su reglamento interno y normas procesales;

g) organizar y dirigir todas las tareas administrativas y técnicas del Organismo;

h) convocar a la comisión plenaria en los siguientes casos:

1) para realizar las reuniones previstas en el artículo 18;

2) para resolver los recursos de apelación a que se refiere el artículo 17, inciso e), dentro de los 30 (treinta) días de su interposición; a tal efecto remitirá a cada una de las jurisdicciones, dentro de los 5 (cinco) días de interpuesto el recurso copia de todos los antecedentes del caso en apelación;

3) en toda otra oportunidad que lo considere conveniente;

i) organizar la centralización y distribución de información para la correcta aplicación del presente convenio.

A los fines indicados en el presente artículo, las jurisdicciones deberán remitir obligatoriamente a la comisión arbitral los antecedentes e informaciones que ésta les solicite para la resolución de los casos sometidos a su consideración y

facilitar toda la información que les sea requerida a los fines del cumplimiento de lo establecido en el inciso i).

Art. 25 - Contra las disposiciones generales interpretativas y las resoluciones que dicte la comisión arbitral, los Fiscos adheridos y los contribuyentes o asociaciones reconocidas afectadas, podrán interponer recurso de apelación ante la comisión plenaria, en la forma que establezcan las normas procesales y dentro de los 30 (treinta) días hábiles de su notificación.

Art. 26 - A los fines mencionados en el artículo anterior las resoluciones de la comisión arbitral deberán ser comunicadas por carta certificada con aviso de recepción a todas las jurisdicciones adheridas y a los contribuyentes o asociaciones reconocidas que fueran parte en el caso concreto planteado o consultado.

En el caso de pronunciamiento dictado con arreglo a lo previsto en el artículo 24, inciso a), se considerará notificación válida con respecto a los contribuyentes y asociaciones reconocidas, la publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

#### DISPOSICIONES VARIAS

Art. 27 - En la atribución de los gastos e ingresos a que se refiere el presente Convenio se atenderá a la realidad económica de los hechos, actos y situaciones que efectivamente se realicen.

Art. 28 - Los contribuyentes deberán presentar en el lugar, tiempo y forma que se determine, una planilla demostrativa de los ingresos brutos totales discriminados por jurisdicciones y de los gastos efectivamente soportados en cada una de ellas. La liquidación del impuesto en cada jurisdicción se efectuará de

acuerdo con las normas legales y reglamentarias locales respectivas siempre que no se opongan a las disposiciones del presente Convenio.

Art. 29 - Todas las jurisdicciones están facultadas para inspeccionar directamente a los contribuyentes comprendidos en este Convenio, cualquiera fuese su domicilio o lugar donde tengan su administración o sede, con conocimiento del Fisco correspondiente.

Art. 30 - Los contribuyentes comprendidos en el presente Convenio están obligados a suministrar todos los elementos de juicio tendientes a establecer su verdadera situación fiscal, cualquiera sea la jurisdicción adherida que realice la fiscalización.

Art. 31 - Las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la colaboración necesaria a efectos de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales. Dicha colaboración se referirá especialmente a las tareas relativas a la información, recaudación y fiscalización del tributo.

Art. 32 - Las jurisdicciones adheridas no podrán aplicar a las actividades comprendidas en el presente Convenio, alícuotas o recargos que impliquen un tratamiento diferencial con respecto a iguales actividades que se desarrollen en todas su etapas, dentro de una misma jurisdicción.

Art. 33 - En los casos en que los contribuyentes desarrollaran simultáneamente actividades en jurisdicciones adheridas y no adheridas, la distribución de ingresos brutos se efectuará atribuyendo a los Fiscos adheridos y a los que no lo están las sumas que les correspondan con arreglo al régimen general o a los especiales que prevé este Convenio, pudiendo las jurisdicciones adheridas gravar solamente la parte de los ingresos brutos que les haya correspondido.

Art. 34 - Este Convenio comenzará a regir desde el 1 de enero inmediato siguiente a su ratificación por todas las jurisdicciones. Su vigencia será de dos años y se prorrogará automáticamente por períodos bienales, salvo que 1/3 (un tercio) de las jurisdicciones lo denunciara antes del 1 de mayo del año de su vencimiento.

Las jurisdicciones que denunciaren el presente Convenio sólo podrán separarse al término del período bienal correspondiente.

Art. 35 - En el caso de actividades objeto del presente Convenio, las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas, podrán gravar en concepto de impuestos, tasas, derechos de inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea permitida por las leyes locales sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en el respectivo ámbito jurisdiccional, únicamente la parte de ingresos brutos atribuibles a dichos Fiscos adheridos como resultado de la aplicación de las normas del presente Convenio.

La distribución de dicho monto imponible entre las jurisdicciones citadas se hará con arreglo a las disposiciones previstas en este Convenio si no existiere un acuerdo interjurisdiccional que reemplace la citada distribución en cada jurisdicción provincial adherida.

Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes locales o similares de las jurisdicciones adheridas, sólo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada, las jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación, podrán gravar en conjunto el 100% (ciento por ciento) del monto imponible atribuible al fisco provincial.



Las disposiciones de este artículo no comprometen a las jurisdicciones respecto a las cuales controvierta expresas disposiciones constitucionales.

#### DISPOSICION TRANSITORIA

Art. 36 - La Comisión Arbitral mantendrá su composición actual de acuerdo a las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente convenio, y hasta tanto se produzcan las renovaciones de acuerdo a lo que establecen los artículos 20 y 21.

#### PROTOCOLO ADICIONAL

Art. 1 - En los casos en que, por fiscalización, surjan diversas interpretaciones de la situación fiscal de un contribuyente sujeto al Convenio, y se determinen diferencias de gravamen por atribución en exceso o en defecto de base imponible, entre las jurisdicciones en las que el contribuyente desarrolla la actividad se procederá de la siguiente forma:

1) una vez firme la determinación, y dentro de los 15 (quince) días hábiles de ello, el Fisco actuante deberá poner en conocimiento de las restantes jurisdicciones involucradas el resultado de la determinación practicada, expresando detalladamente las razones que dieron lugar a las diferencias establecidas;

2) los Fiscos notificados deberán contestar al Fisco que llevó a cabo el procedimiento, manifestando su conformidad a la determinación practicada, dentro de los 30 (treinta) días hábiles de haber recibido la comunicación respectiva.

La falta de respuesta por parte de los Fiscos notificados será considerada como consentimiento de los mismos a la determinación practicada;

3) en caso de existir disconformidad por parte de alguna o algunas de las jurisdicciones, ésta o éstas deberán comunicar al Fisco iniciador, siempre dentro del plazo fijado en el punto 2, que someterán el caso a decisión de la comisión [art. 24, inc. b), del Convenio]. La presentación deberá hacerse dentro de los 15 (quince) días hábiles del vencimiento del plazo a que se refiere el citado punto 2, elevándose en tal momento todos los antecedentes del caso, con la expresión fundada de su disconformidad.

La comisión arbitral se abocará al análisis de fondo del asunto, debiendo pronunciarse en el término de los 60 (sesenta) días hábiles de haber sido recibida la presentación de disconformidad. Dicho plazo podrá ser prorrogado por resolución fundada;

4) contra la decisión de la comisión arbitral podrá interponerse el recurso de apelación previsto en el artículo 17, inciso e), del Convenio;

5) una vez aceptada la determinación por los Fiscos, ya sea en el caso del punto 2 ó habiéndose producido la decisión final de la comisión arbitral o de la comisión plenaria, según corresponda, las jurisdicciones acreedoras procederán a la liquidación del gravamen del contribuyente en función de las diferencias de base imponible establecidas.

A los efectos de la liquidación de la actualización que pudiera corresponder, se deberán tomar en cuenta los importes a favor del contribuyente que surjan por atribución de base imponible en exceso. Para ello, se determinará la incidencia porcentual de las diferencias observadas respecto del total de las mismas, a efectos de distribuir proporcionalmente las bases imponibles asignadas en exceso, entre los distintos Fiscos acreedores;

6) las jurisdicciones podrán aplicar multas, recargos y/o intereses por las diferencias de impuestos comprobadas, únicamente en los casos previstos en el punto 2.

Art. 2 - El contribuyente, dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificado por el Fisco acreedor, deberá repetir el impuesto en aquellas jurisdicciones en las que se procedió a la liquidación del mismo por asignación en exceso de base imponible. Los Fiscos respectivos resolverán la acción de repetición en la forma que se detalla en los párrafos siguientes, actualizando los respectivos importes desde el momento en que se hubiera producido el pago en exceso, aplicando los coeficientes de actualización correspondientes. En los casos comprendidos en el artículo 1º, punto 2, la actualización se calculará de conformidad con lo dispuesto por las normas locales pertinentes.

A los fines expresados se extenderán documentos de crédito a favor del contribuyente y a la orden del o los Fiscos acreedores. El depósito respectivo deberá ser efectuado por el contribuyente dentro de los 10 (diez) días hábiles de su recepción, vencidos los cuales, le podrán ser aplicadas por los Fiscos acreedores, las normas locales relativas a actualización e intereses por el tiempo que exceda dicho plazo.

El Fisco librador deberá satisfacer al o a los beneficiarios, a su presentación, los créditos respectivos.

Si el contribuyente no promoviera la acción de repetición en el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo, deberá satisfacer su deuda al Fisco acreedor dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo fijado.

En tal caso, su derecho a gestionar la repetición ante las jurisdicciones en que correspondiera, quedará sujeto a las normas locales respectivas.

## **Anexo 2: Pacto Federal**

Decreto 1807/93

Instrúyese al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco de la Nación Argentina para que en sus ámbitos apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

Bs. As., 27/8/93

VISTO el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales signatarios de fecha 12 de agosto de 1993, y

### **CONSIDERANDO:**

Que los poderes Públicos de la Nación y de las Provincias han concertado un acuerdo general tendiente a establecer las bases para un crecimiento sostenido de la actividad económica, la productividad y los niveles de ocupación.

Que para la consecución de los altos objetivos invocados resulta útil y conveniente que ciertas medidas adoptadas sean puestas en práctica sin demora.

Que al respecto cabe tener presente lo convenido por las partes en el artículo 4º del mismo, en cuanto a que las Provincias y el Estado Nacional procederán a elevar en un breve plazo a sus legislaturas y al Congreso Nacional los proyectos de ley en virtud de los cuales se apruebe el pacto concertado.

Que durante el plazo que demande la consideración, aprobación y sanción de los referidos instrumentos legales, resulta indispensable poner en marcha diversos mecanismos tendientes a la eficaz y oportuna implementación de lo

acordado, por parte de los órganos competentes de las respectivas administraciones de la Nación y las Provincias.

Que en ese orden resulta necesario suspender de inmediato la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal de acuerdo a lo previsto en el artículo 2º, inciso 8) del pacto mencionado en el Visto.

Que el presente constituye un instrumento con que cuenta el PODER EJECUTIVO NACIONAL en su carácter de administrador general del país, para llevar a cabo los objetivos de bien común de la Nación.

Que al respecto éste reconoce como antecedente inmediato el Decreto Nº 1602 de fecha 31 de agosto de 1992.

Que el presente se dicta a tenor de las facultades conferidas por el artículo 86 inciso 1 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Instrúyase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y al BANCO DE LA NACION ARGENTINA para efectuar dentro del marco de sus competencias, todas las operaciones necesarias para la aplicación de lo establecido en el PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO, que en copia autenticada forma parte integrante del presente, como Anexo I.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Domingo F. Cavallo.

## ANEXO I

### PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO

En la ciudad de Buenos Aires a los doce días del mes de agosto de 1993, se reúnen el Señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Carlos Saúl Menem y los Señores Gobernadores abajo firmantes con el objetivo de comprometerse en distintas acciones necesarias para promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país y sus regiones, en un todo de acuerdo con el Programa "Argentina en Crecimiento 1993-1995" y con los Programas de Transformación que tienen encaminados las Provincias Argentinas, y declaran:

#### PRIMERO

Los Señores Gobernadores han acordado la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales. Las políticas acordadas se concretarán por los Poderes Ejecutivos Provinciales, una vez aprobado el presente Acuerdo por las Honorables Legislaturas Provinciales en lo que es materia de su competencia según las Constituciones locales, en los siguientes actos de gobierno:

##### 1) Derogar en sus jurisdicciones el IMPUESTO DE SELLOS.

La derogación deberá incluir de inmediato la eliminación del Impuesto de Sellos a toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada destinada a los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción e ir abarcando gradualmente al resto de las operaciones y sectores de la forma que determine cada provincia, y deberá completarse antes del 30 de junio de 1995.

La presente derogación no alcanza a las tasas retributivas de servicios administrativos efectivamente prestados y que guarden relación con el costo del

servicio. Tampoco alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV de la Ley 23.966, ni a instrumentos que no inciden ni directa ni indirectamente en el costo de los procesos productivos.

2) Derogar de inmediato los Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica, incluso los que recaen sobre la auto generada, y Servicios Sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a uso doméstico. Asimismo se derogarán de inmediato las que graven directa o indirectamente, a través de controles, la circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios del espacio físico, incluido el aéreo.

Asimismo se promoverá la derogación de las Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos provinciales detallados en los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del respectivo proyecto de ley a la Legislatura Provincial o a través de la recomendación a los Municipios que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales gravámenes. Igual actitud se seguirá respecto de las Tasas Municipales en general, en los casos que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los que excedan el costo que derive de su prestación.

3) Derogar de inmediato los Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios, y gradualmente todos aquellos que graven la Nómina Salarial, completando la derogación antes del 30 de junio de 1995.

4) Modificar el IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, disponiendo la exención de las actividades que se indican a continuación:

a) Producción primaria,

b) Prestaciones financieras realizadas por las entidades comprendidas en el régimen de la Ley N° 21.526.

c) Compañías de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios, las Administradoras de Fondos Comunes de Inversión y de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Compañías de Seguros, exclusivamente por los ingresos provenientes de su actividad específica.

d) Compraventa de divisas, exclusivamente por los ingresos originados en esta actividad.

e) Producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista.

f) Prestaciones de servicios de electricidad, agua y gas, excepto para las que se efectúan en domicilios destinados a vivienda o casa de recreo o veraneo.

g) Construcción de inmuebles.

Estas exenciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo a lo que disponga cada Provincia, pero deberán estar completadas antes del 30 de junio de 1995.

La exención no alcanzará a todas las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV, de la Ley N° 23.966.

Para compensar la posible falta de ingresos, las Provincias eliminarán exenciones, desgravaciones y deducciones existentes a actividades no incluidas en el listado anterior y adecuarán las alícuotas aplicables a todas las actividades no exentas.



5) Modificar, a partir del 1º de enero de 1994, los Impuestos sobre la Propiedad Inmobiliaria a fin de que:

a) Las tasas medias que resulten aplicables, en ningún caso: superen el UNO CON VEINTE CENTESIMOS POR CIENTO —(1,20 %)— para los inmuebles rurales, el UNO CON TREINTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (1,35 %) para los suburbanos y/o subrurales y el UNO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (1,50 %) para los urbanos, y

b) La base imponible no supere el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del valor de mercado de los inmuebles urbanos y suburbanos y/o subrurales o del valor de la tierra libre de mejoras en el caso de los inmuebles rurales.

Recomendar a los Municipios la modificación de las Tasas Viales y de Mantenimiento de Caminos o de otras similares a fin de que no superen el CUARENTA CENTESIMOS POR CIENTO (0,40 %) del OCHENTA POR CIENTO (80 %) del valor de mercado de los inmuebles suburbanos o del valor de la tierra libre de mejoras y se ajusten en todo caso al costo que derive de la prestación efectiva del servicio retribuido.

6) Intensificar al máximo las tareas de fiscalización y control que deben desarrollar sus respectivos Organismos Recaudadores; Implementar coordinadamente, sistemas uniformes en todas las jurisdicciones que, como los regímenes de retención o percepción en la fuente o de pago a cuenta o de anticipo, aseguren un determinado nivel de recaudación y prevea metodología que permita la discriminación obligatoria del actual impuesto sobre los Ingresos Brutos en las facturas o documentos equivalentes, en las ventas entre inscriptos. Las provincias coordinarán su acción con relación a los sistemas multilaterales de administración y solución de conflictos que aseguren la recaudación y control en el caso de contribuyentes que realicen actividades en más de una jurisdicción.

7) Asumir la obligación de que en un plazo no mayor de tres años, a partir de la firma del presente convenio y una vez superado el período de transición y logrado un mayor control de la evasión, la imposición del Impuesto a los Ingresos Brutos, limitada en los términos del punto 4) anterior, sea sustituida por un impuesto general al consumo que tienda a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía.

8) Asumir, a partir del 1º trimestre de 1994, la obligación de que las valuaciones y alícuotas a aplicar, con relación a los impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares a nivel Provincial guarden uniformidad entre todas las jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia la que publica la Dirección General Impositiva, a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales no Incorporados al Proceso Económico.

En el caso de las Provincias en que el impuesto sobre las patentes de automotores y/o similares, esté, total o parcialmente, a cargo de los municipios se propondrá a los mismos la adecuación al régimen precedente.

9) Propender a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de las provincias o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las Provincias.

10) Dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios y las intervenciones en diversos mercados, en particular:

— adhiriendo al Decreto 2284/91 en lo que resulte de aplicación provincial;

— derogando el carácter de orden público de los aranceles correspondientes a honorarios profesionales en todos los sectores;

— liberando al sector comercial (libre instalación de farmacias, derogación del monopolio de mercados mayoristas, horarios comerciales, etc.);

— eliminando todas las restricciones cuantitativas o de otro orden que limitaren el ejercicio de las profesiones universitarias y no universitarias.

— disponiendo la apertura de los mercados del transporte de pasajeros y carga de acuerdo a las orientaciones adoptadas en el nivel federal;

— propiciando las medidas tendientes a disminuir los costos judiciales y del ejercicio profesional. En particular la determinación de honorarios de abogados y peritos, se hará guardando relación con el número de horas trabajadas y no por el monto de la demanda o sentencia.

— adhiriendo a la política federal en materia minera de acuerdo a lo establecido en el decreto 815/92.

— adhiriendo, en las jurisdicciones provinciales que corresponda, a la política federal en materia portuaria de acuerdo a lo establecido en el decreto 817/92.

— adhiriendo a la política federal en materia de medicamentos establecida en el decreto 150/92 y sus modificatorios.

— reconociendo los controles y registros federales y de las demás Provincias en materia de medicamentos y alimentos.

11) Adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidos por los artículos 1 a 7, 8 a 13, 15 a 19, 21 a 40, 60, 61, 62 y 63 de la Ley Nº 23.696 y por los artículos 1 y 2, 23, 36, 42 a 47, 60 y 61 de la Ley Nº 23.697, los que adecuados al ordenamiento provincial, serán de aplicación directa en las Provincias. Idéntico procedimiento se adoptará, en lo que resulte de aplicación provincial, con los decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 958/92, 142/92, 1494/92, 1813/92 y 2293/92.

12) Las Provincias que suscriben este Acuerdo se adhieren, a los fines de determinar la competencia en materia de accidentes de trabajo, al criterio establecido en el artículo 16 de la Ley Nº 24.028.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación para aquellas Provincias que al 27 de octubre de 1993 deroguen el Impuesto de Sellos a toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada destinada a los sectores agropecuarios, industrial, minero y de la construcción. En el supuesto que la referida derogación sea cumplimentada por los estados provinciales con posterioridad a dicha fecha, al derogación que se dispone en el primer párrafo de este artículo regirá a partir del día 1º del mes siguiente al de la fecha del dictado del acto provincial correspondiente. (Párrafo incorporado por art. 2º del Decreto Nº 2078/93 B.O. 15/10/1993. Vigencia: a partir de la entrada en vigencia del Decreto Nº 1802/93.)

## SEGUNDO

El Estado Nacional, correspondiendo al aporte que significa para el proceso de crecimiento de la economía nacional y regionales, lo acordado precedentemente por los Señores Gobernadores, conviene en la realización de los siguientes actos de gobierno:

1) Reformular los tributos que percibe la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido y plazos en que se comprometen las Provincias.

En el caso de los Impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares, unificar las valuaciones y alícuotas a aplicar con las de las restantes jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia las que publica la Dirección General Impositiva a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales No Incorporado al Proceso Económico.

2) Eliminar el Impuesto a los Activos afectados a los procesos productivos, en aquellos sectores alcanzados por las derogaciones y exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto de Sellos.

3) Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral. Esta disminución se hará acompañando las prioridades sectoriales reflejadas en las decisiones sobre operaciones y sectores alcanzados por las exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos.

4) Adecuar de inmediato las normas sobre retenciones y pagos a cuenta del IVA para que en ningún caso los contribuyentes paguen una tasa efectiva superior al 18 %.

5) Organizar y poner en marcha el Sistema de Cédulas Hipotecarias Rurales y de Bonos Negociables respaldados por hipotecas urbanas, dando participación en el operativo a los Bancos de Provincia, para viabilizar el financiamiento a mediano y largo plazo para el sector agropecuario y de la construcción.

6) Aceptar la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales —con exclusión de las de Profesionales que prevee el artículo 56 de la Ley Nº 18.038 (t.o. 1980)— en el caso de las Provincias que adhieran al nuevo Régimen Previsional que sancione la Nación, respetando los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados provinciales. Para el caso que con posterioridad a la fecha del presente alguna Provincia modificara su legislación en materia de jubilaciones y pensiones, el mayor costo que pudiera resultar de dichas modificaciones estará a cargo exclusivo de dicha Provincia. Esta transferencia se instrumentará a través de convenios particulares con cada jurisdicción provincial interesada, los que deberán suscribirse en un plazo de 90 días a partir de la sanción de la Ley Provincial respectiva.

7) Asegurar, a través de los respectivos organismos sectoriales responsables y los Entes Reguladores de servicios públicos privatizados, que las medidas impositivas a adoptarse en los niveles de gobierno nacional, provincial o municipal que puedan implicar directa o indirectamente, reducciones de costos o aumento de los beneficios en las empresas prestadoras de servicios públicos y/o proveedoras de bienes y servicios en mercados no competitivos, resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores.

8) Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en el presente Acuerdo, el Gobierno Nacional suspenderá la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de \$ 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley Nº 24.130. Esta suspensión regirá transitoriamente en forma automática por sesenta (60) días y en forma permanente a partir del momento en que cada Provincia cumplimente los compromisos de aplicación inmediata asumidos en el presente Acuerdo. La garantía de \$ 725 millones se elevará a \$ 740 millones a partir del 1º de enero de 1994.

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 24.671 B.O. 01/08/1996 se prorroga, con efecto retroactivo al 1º julio de 1995, la garantía de setecientos cuarenta millones de pesos (\$ 740.000.000) establecida en el presente apartado. "Las sumas que resulten de la aplicación de esta garantía serán liquidadas y transferidas mensualmente dentro de los diez días del mes siguiente".)

(Nota Infoleg: Por art. 1º del Decreto Nº 2078/93 B.O. 15/10/1993 se prorroga por sesenta (60) días adicionales, el plazo establecido en el presente párrafo, "para que las Provincias cumplieren los compromisos de aplicación inmediata asumidos en dicho Pacto".)

Cuando la recaudación impositiva definida en iguales términos al párrafo anterior exceda un nivel para las provincias de \$ 800 millones mensuales, las Provincias asumen el compromiso de utilizar estos excedentes para cancelar deudas consolidadas contraídas previamente al Acuerdo del 12 de agosto de 1992 o para financiar erogaciones de capital y programas de reformas de los Estados Provinciales que sean aprobados por el Gobierno Nacional.

### TERCERO

Las Provincias firmantes y el Estado Nacional incluyen en el presente Acuerdo la prórroga hasta el día 30 de junio de 1995 de la vigencia del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el día 12 de agosto de 1992, ratificado por ley Nº 24.130, incluyendo las modificaciones introducidas por el punto 8) del artículo Segundo del presente.

Se incorpora a la Cláusula Primera, inciso b) del Acuerdo arriba mencionado a las Provincias de Corrientes con \$ 1.500.000 (Pesos un millón quinientos mil) y del Chaco con \$ 500.000 (Pesos quinientos mil), para cubrir desequilibrios fiscales.

### CUARTO

Las Provincias y el Estado Nacional procederán a elevar a las legislaturas, dentro de los diez días de suscrito el presente, los proyectos de ley en virtud de los cuales se apruebe este Pacto con la autorización a los respectivos Poderes Ejecutivos a dictar las normas para cumplir con lo convenido en el presente Acuerdo.

El presente Acuerdo producirá efectos solo en favor de las provincias que lo firmen y desde el momento del acto de firma.

Este PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO, queda abierto a la adhesión por parte de los señores Gobernadores de las Provincias que no lo suscriben en el día de la fecha.

Refrendan el presente los Señores Ministros del Interior, Dr. Gustavo Béliz y de Economía y Obras y Servicios Públicos, Dr. Domingo Felipe Cavallo y el Señor Secretario General de la Presidencia, Dr. Eduardo Bauzá.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Ley Nº 24.699 B.O. 27/09/1996 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1998 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993.)

(Nota Infoleg: Por art. 5º de la Ley Nº 24.468 B.O. 23/03/1995 se prorroga "hasta el 1 de abril de 1996 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento relacionadas exclusivamente a materia tributaria, y cuyo vencimiento hubiera operado u operase con anterioridad a dicha fecha, que estuvieren pendientes de implementación".)

(Nota Infoleg: Por art. 1º del Decreto Nº 14/94 B.O. 25/01/1994 se ratifica el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales, suscripto el 12 de agosto de 1993 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los señores gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.)